



# Asamblea General

Distr. general  
22 de mayo de 2020  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87º período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020

#### Opinión núm. 12/2020 relativa a Mustafa Hassanat (Israel)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 6 de enero de 2020 al Gobierno de Israel una comunicación relativa a Mustafa Hassanat. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad es arbitraria en los siguientes casos:
  - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
  - b) Cuando la privación de libertad resulte del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en lo que concierne a los Estados Partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
  - c) Cuando la inobservancia total o parcial de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
  - d) Cuando los solicitantes de asilo, los inmigrantes o los refugiados son sometidos a una detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);
  - e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

4. Mustafa Hassanat es un estudiante de secundaria superior que tiene documentos de identidad expedidos por la Autoridad Palestina. Normalmente reside en un campo de refugiados en Belén. Tenía 20 años en el momento de su arresto.

#### **Contexto**

5. La fuente informa de que el Sr. Hassanat fue arrestado por las Fuerzas de Defensa de Israel el 5 de junio de 2018. Un grupo de aproximadamente 20 soldados se presentó de noche en su casa, sita en el campo de refugiados. Después de registrar la casa y cachear al Sr. Hassanat, los soldados le esposaron y le vendaron los ojos antes de conducirlo a un jeep militar. La fuente alega que el Sr. Hassanat fue entonces maltratado y golpeado por los soldados, quienes con las manos y sus armas le pegaron y golpearon en la cabeza, cara y pecho durante su traslado a la prisión de Ofer. La fuente afirma que no se dio ninguna razón para el arresto ni se mostró orden alguna de detención. El arresto se basó únicamente en órdenes militares no comunicadas al Sr. Hassanat en el momento en que se produjo.

6. El Sr. Hassanat está privado de libertad desde el 5 de junio de 2018, bajo la custodia de las Fuerzas de Defensa de Israel por orden del Comandante Militar de la Ribera Occidental. Primero fue recluido en la prisión de Ofer, antes de ser transferido a la prisión de Al-Naqab poco después de su arresto. La fuente alega que el Sr. Hassanat fue colocado en régimen de aislamiento cuando inició una huelga de hambre el 1 de julio de 2019. El 17 de julio de 2019, fue trasladado a la prisión de Nitzan, donde quedó recluido en régimen de aislamiento. Actualmente permanece privado de libertad en la prisión de Al-Naqab, tras una breve estancia de una semana en la enfermería de la prisión de Al-Ramleh cuando puso fin a su huelga de hambre, el 5 de agosto de 2019.

7. La fuente afirma que el Sr. Hassanat se encuentra en detención administrativa en virtud del artículo 285 de la Orden Militar israelí núm. 1651, que faculta a los mandos militares para privar de libertad a una persona durante un máximo de seis meses si tienen motivos razonables para considerar que la seguridad de la zona o la seguridad pública exigen su reclusión. Según la fuente, la detención es prorrogable. Sin embargo, en la práctica, la prórroga de la detención se lleva a cabo de forma indefinida, y está sujeta a la única facultad discrecional del comandante.

8. La fuente informa que la primera orden de ingreso en prisión del Sr. Hassanat por seis meses se dictó unos días después de su arresto y estaba previsto que finalizara el 4 de enero de 2019. Sin embargo, la reclusión se prorrogó por otros seis meses, justo antes de que expirara la primera orden, y se volvió a prorrogar hasta el 3 de junio de 2019. Poco antes de esa fecha, el Sr. Hassanat recibió una tercera orden, por la que se prorrogaba su reclusión hasta el 2 de enero de 2020.

9. El Sr. Hassanat ha estado boicoteando el tribunal militar israelí desde que se dictó una orden de detención administrativa en su contra. Se niega a asistir a las audiencias de confirmación de la orden de reclusión y a las apelaciones. La fuente afirma que el Sr. Hassanat se declaró en huelga de hambre el 1 de julio de 2019 como forma de protesta tras la tercera renovación de su orden de reclusión y para exigir su liberación. Puso fin a su huelga de hambre el 5 de agosto de 2019 después de que le comunicaran que la orden de reclusión solo se prorrogaría una vez más.

10. Según la fuente, la última audiencia de prórroga de la reclusión se celebró el 2 de diciembre de 2019 y se emitió una nueva orden de privación de libertad válida por otros seis meses, que expira el 1 de junio de 2020. El Sr. Hassanat boicoteó la audiencia de nuevo y su abogado presentó una apelación, la fecha de cuya audiencia aún no ha sido fijada por el tribunal militar. El Sr. Hassanat trata de lograr que se le ponga en libertad a principios de mayo de 2020, para poder prepararse para los exámenes de admisión a la universidad.

### Análisis de las vulneraciones cometidas

11. La fuente sostiene que las autoridades israelíes han recurrido a la política de la detención administrativa como alternativa a un juicio justo, dado que a menudo se utiliza cuando las autoridades no realizan una investigación o no prueban los cargos presentados contra un detenido.

12. La privación de libertad de personas sobre la base de material e información confidenciales (a los que no tienen acceso ni el detenido ni su abogado) constituye una violación fundamental del derecho a un juicio justo, según el artículo 14 del Pacto. En esas circunstancias, no se ofrece a los detenidos una oportunidad equitativa de defenderse, con o sin el apoyo de un abogado.

13. La fuente subraya que en ningún momento se informó al Sr. Hassanat de la naturaleza y los motivos de su detención y de los cargos que se le imputaban, ya que la detención administrativa no conlleva la presentación de cargos. Además, la detención en virtud del artículo 285 de la Orden Militar núm. 1651 se prolonga durante largos períodos de tiempo. Esa detención está sujeta a la discreción del comandante militar competente y es efectivamente ilimitada, independientemente de los cargos y las pruebas reunidas en el caso.

14. La fuente sostiene que no se concedió al Sr. Hassanat el derecho a defenderse, al igual que a todas las personas en detención administrativa, que no saben por qué están detenidos y no han sido informados de los cargos que se les imputan, por lo que no tienen medios para defenderse.

15. Además, la fuente afirma el Sr. Hassanat no se benefició de la presunción de inocencia en tanto que no se demostrara su culpabilidad. Según la fuente, el tribunal militar ha asumido que el Sr. Hassanat es culpable por el mero hecho de que el Comandante Militar de la Ribera Occidental haya dictado una orden de detención administrativa contra él.

16. Además, la fuente sostiene que las audiencias relativas a la detención administrativa no son imparciales y públicas, sino que se celebran en sesiones a puerta cerrada en las que participan el juez militar, la fiscalía militar, el detenido y su abogado. En el caso del Sr. Hassanat, el expediente secreto en el que se basa su detención se ha examinado en una audiencia a puerta cerrada en la que solo intervienen el juez militar y la fiscalía militar.

17. Por estas razones, la fuente concluye que la detención del Sr. Hassanat es arbitraria, y se inscribe en particular en la categoría III.

### *Respuesta del Gobierno*

18. El 6 de enero de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno con arreglo a su procedimiento ordinario de comunicación, pidiéndole que, a más tardar el 6 de marzo de 2020, facilitara información detallada sobre la situación actual del Sr. Hassanat. El Grupo de Trabajo también pidió al Gobierno que aclarara las disposiciones jurídicas que justificaban la continuación de su privación de libertad, así como su compatibilidad con las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Además, el Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que garantizara la integridad física y mental del Sr. Hassanat.

19. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta del Gobierno a su comunicación. El Gobierno no solicitó una prórroga del plazo para responder, como está previsto en los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

20. El Grupo de Trabajo observa con preocupación el silencio del Gobierno, que no aprovecha la oportunidad de responder a las alegaciones formuladas en el presente caso y en otras comunicaciones<sup>1</sup>. De hecho, el Gobierno no ha dado una respuesta sustantiva a las

<sup>1</sup> Opiniones núms. 84/2019, 73/2018, 34/2018, 86/2017, 44/2017, 31/2017, 3/2017, 24/2016, 15/2016, 13/2016, 43/2014, 58/2012, 20/2012, 3/2012, 9/2010, 5/2010, 23/2001, 31/2000, 18/2000, 17/2000, 16/2000, 4/1999, 11/1998, 10/1998, 9/1998, 8/1998, 24/1996, 18/1996, 17/1996, 16/1996, 26/1993,

comunicaciones del Grupo de Trabajo durante más de diez años, desde 2007<sup>2</sup>. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que colabore constructivamente con él en todas las denuncias relativas a la privación arbitraria de libertad.

### Deliberaciones

21. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

22. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

23. El Grupo de Trabajo recibió denuncias verosímiles de que el Sr. Hassanat había sido detenido el 5 de junio de 2018, que no se le había mostrado ninguna orden de detención y que no se le había comunicado el motivo de la misma. Además, el arresto se basó únicamente en órdenes militares que no se revelaron al Sr. Hassanat en el momento del arresto. Además, se notificó al Grupo de Trabajo que el Sr. Hassanat no había sido informado de los cargos que se le imputaban y, por lo tanto, no tenía medios para defenderse. En casos recientes, el Grupo de Trabajo ha constatado que las autoridades israelíes han cometido violaciones similares de los procedimientos de detención, lo que sugiere que las afirmaciones de la fuente son creíbles<sup>3</sup>, y el Grupo de Trabajo observa la existencia de un patrón. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno ha violado el artículo 9, párrafo 2, del Pacto, que dispone que toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

24. Además, el Grupo de Trabajo es consciente de que cuando un grupo de aproximadamente 20 soldados se presentó de noche en casa del Sr. Hassanat, sita en el campamento de refugiados, llevaron a cabo un registro de la casa y cachearon al Sr. Hassanat. En el presente caso, las pruebas contra el Sr. Hassanat no han sido reveladas y no está claro si los registros dieron lugar a alguna prueba utilizada para justificar su detención administrativa.

25. El Grupo de Trabajo es consciente de que el tribunal militar israelí ha denegado al Sr. Hassanat y a su abogado el acceso a la información en la que se basó para dictar cuatro órdenes de detención administrativa contra el Sr. Hassanat, y que el expediente secreto en el que se basa la detención del Sr. Hassanat solo se ha examinado en una audiencia a puerta cerrada entre el juez militar y la fiscalía militar.

26. Como ha declarado el Comité de Derechos Humanos, la revelación al detenido de por lo menos la esencia de las pruebas sobre las que se basa la decisión de dictar una orden de detención administrativa es necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos que impone el artículo 9 del Pacto<sup>4</sup>. El Grupo de Trabajo considera que no se ha informado al Sr. Hassanat de la naturaleza y la causa de su detención con suficiente detalle para poder impugnar la legalidad de la misma. Ha estado privado de libertad durante casi dos años, desde el 5 de junio de 2018, sin poder ejercer los derechos que le confiere el artículo 9,

18/1993, 17/1993 y 36/1992. El Gobierno presentó respuestas a las comunicaciones del Grupo de Trabajo en relación con las opiniones núms. 26/2007, 3/2004, 24/2003 y 16/1994.

<sup>2</sup> En relación con la opinión núm. 86/2017, el Gobierno solicitó y recibió una prórroga para responder a la comunicación del Grupo de Trabajo, pero no presentó ninguna respuesta sustantiva.

<sup>3</sup> Opiniones núms. 73/2018, 34/2018, 86/2017, 44/2017, 31/2017, 3/2017, 15/2016 y 13/2016.

<sup>4</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014) sobre la libertad y la seguridad personales, párr. 15. El Comité de Derechos Humanos también ha expresado su preocupación específicamente en relación con el uso por Israel de la detención administrativa fundamentada en pruebas secretas (véase CCPR/C/ISR/CO/4, párr. 10).

párrafo 4, del Pacto<sup>5</sup>. El hecho de que el Sr. Hassanat haya boicoteado el tribunal militar israelí desde que se le emitió una orden de detención administrativa no cambia esta conclusión. Incluso si hubiera asistido a las audiencias de confirmación de su orden de detención y a cualquier apelación, no tendría la información necesaria para impugnar su detención.

27. La supervisión judicial de la detención es una salvaguardia fundamental de la libertad personal<sup>6</sup> y un elemento esencial para garantizar que la detención tenga fundamento jurídico. Dado que el Sr. Hassanat no ha podido impugnar efectivamente su detención, también se ha violado su derecho a un recurso efectivo en virtud del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

28. También es esencial que el examen de la legalidad de la detención sea realizado por una autoridad independiente e imparcial<sup>7</sup>. En el presente caso, las órdenes de detención del Sr. Hassanat fueron revisadas, aprobadas y prorrogadas cuatro veces por un tribunal militar, a pesar de que el Sr. Hassanat es un civil. En casos anteriores relativos a Israel, el Grupo de Trabajo ha subrayado que los tribunales militares no son independientes ni imparciales porque están integrados por personal militar que está sujeto a la disciplina militar y depende de los superiores para ascender<sup>8</sup>. El Grupo de Trabajo también ha establecido garantías mínimas relativas a la justicia militar, entre ellas que los tribunales militares solo deben ser competentes para juzgar al personal militar por delitos militares, y no a los civiles<sup>9</sup>. El Grupo de Trabajo considera que el derecho a un examen independiente debería tener mayor peso en el Territorio Palestino Ocupado, que ha estado bajo ocupación militar y en el que se ha aplicado la ley militar a los palestinos durante los últimos 53 años, desde 1967<sup>10</sup>.

29. Además, el Sr. Hassanat ha sido objeto de cuatro órdenes sucesivas de detención administrativa en virtud de la Orden Militar núm. 1651, y fue recluido tras su arresto el 5 de junio de 2018 sin cargos ni juicio. El Grupo de Trabajo coincide con la opinión del Comité de Derechos Humanos de que toda detención administrativa presenta un gran riesgo de privación arbitraria de libertad y, en general, constituye una detención arbitraria, dado que existen otras medidas efectivas para hacer frente a la amenaza, incluido el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la detención administrativa debe ser absolutamente excepcional. Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos en el párrafo 15 de esa observación general:

Si, en las circunstancias más excepcionales, se alega una amenaza presente, directa e imperativa para justificar la reclusión de personas que se considera conllevan tal riesgo, recae en los Estados partes la carga de la prueba de demostrar que la persona en cuestión constituye una amenaza de ese tipo y que no cabe hacer frente a esa amenaza con otras medidas; y dicha carga aumenta en la medida en que se prolonga la reclusión. Los Estados Partes también deben demostrar que la detención no dura más de lo absolutamente necesario, que la duración total de la posible detención es limitada y que respetan plenamente las garantías previstas en el artículo 9 en todos los casos<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> El Grupo de Trabajo ha llegado a conclusiones similares en casos recientes relacionados con Israel en relación con la detención basada en pruebas que no se han puesto a disposición del detenido (véanse las opiniones núms. 73/2018, 34/2018, 86/2017 y 44/2017).

<sup>6</sup> Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, párr. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, directriz 4, párr. 55; y la opinión núm. 46/2019, párr. 54. Véase también Comité Internacional de la Cruz Roja, "Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges", (Ginebra, noviembre de 2014), pág. 9.

<sup>8</sup> Opiniones núms. 73/2018, 24/2016, 58/2012 y 3/2012.

<sup>9</sup> A/HRC/27/48, párr. 69.

<sup>10</sup> Opinión núm. 31/2017, párr. 31. Véase también la opinión núm. 3/2012, párr. 23.

<sup>11</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 15. Véase también A/HRC/38/15, párrs. 118.77 a 118.83 (en que los Estados expresaron su preocupación durante el examen periódico universal más reciente de Israel acerca de la práctica de la detención administrativa).

30. En el presente caso, el Gobierno tuvo la oportunidad, pero no ha proporcionado ninguna información o prueba que demuestre que el Sr. Hassanat representaba una amenaza actual, directa e imperativa para la seguridad del Estado, y cómo esta amenaza ha persistido durante su continuada privación de libertad, durante casi dos años. En estas circunstancias, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que el Gobierno no ha demostrado que el Sr. Hassanat represente una amenaza para la seguridad, por lo que está privado de libertad de forma contraria a derecho.

31. Por estas razones, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no ha fundamentado debidamente en derecho el arresto y la privación de libertad del Sr. Hassanat. Su detención es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

32. La fuente alega además que el Gobierno violó el derecho del Sr. Hassanat a un juicio justo. El Grupo de Trabajo observa que se trata de un caso de detención administrativa, que no entraña acusación ni juicio en el sistema de justicia penal, y que normalmente no serían de aplicación las garantías de un juicio imparcial que se contemplan en el artículo 14 del Pacto. Sin embargo, como ha declarado el Comité de Derechos Humanos, la naturaleza de la sanción debe considerarse, independientemente de su clasificación en el derecho interno, para determinar si las garantías de un juicio imparcial que figuran en el artículo 14 se aplican en cada caso:

Las acusaciones de carácter penal corresponden en principio a actos que en el derecho penal nacional se han declarado punibles. La noción puede extenderse también a actos de naturaleza delictiva porque conllevan sanciones que, independientemente de su calificación en el derecho interno, deben considerarse penales por su objetivo, carácter o gravedad<sup>12</sup>.

33. El Grupo de Trabajo ha adoptado este razonamiento en su jurisprudencia, señalando que las disposiciones del artículo 14 del Pacto sobre el derecho a un juicio imparcial son aplicables cuando las sanciones impuestas, por su objetivo, carácter o gravedad, deben considerarse penales aun cuando se trate de una detención administrativa con arreglo al derecho interno<sup>13</sup>. Sin esa investigación sobre la naturaleza de la sanción impuesta, los Estados podrían eludir efectivamente sus obligaciones en virtud del Pacto simplemente caracterizando su régimen de detención como administrativo con arreglo al derecho interno. Esto es particularmente importante en el contexto de las órdenes de detención administrativa impuestas en Israel, que parecen utilizarse como sustituto de los procedimientos penales, más que para prevenir una amenaza inminente, cuando no hay suficientes pruebas para acusar y enjuiciar a una persona<sup>14</sup>.

34. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha determinado que en los casos en que la duración de la detención sea excesiva, la persona gozará de las mismas garantías que en las causas penales, incluidas las previstas en el artículo 14 del Pacto, aunque la detención se califique de administrativa en virtud de la legislación nacional<sup>15</sup>. En el presente caso, el Sr. Hassanat parece haber sido mantenido durante casi dos años en prisión en condiciones similares a las de quienes cumplen una condena penal. En consecuencia, su privación de libertad debe considerarse de carácter penal, por lo que el Grupo de Trabajo examinará si su detención cumple los requisitos del artículo 14 del Pacto y otras disposiciones pertinentes. Al hacerlo, el Grupo de Trabajo reitera que el Gobierno no impugnó ninguna de las alegaciones formuladas por la fuente.

<sup>12</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007) sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 15. Véase también *Perterer c. Austria* (CCPR/C/81/D/1015/2001), párr. 9.2.

<sup>13</sup> Opiniones núms. 73/2018, 31/2017, 43/2014, 58/2012, 45/2012, 20/2012 y 3/2012. Véase también A/HRC/37/42, párr. 17; y Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Deliberación núm. 9, A/HRC/22/44, párrs. 68 y 69.

<sup>14</sup> A/HRC/37/42, párr. 21.

<sup>15</sup> Opiniones núms. 73/2018, párr. 60 (detención administrativa durante casi un año); y 31/2017, párr. 30 (detención administrativa durante diez meses).

35. El tribunal militar israelí emitió y confirmó cuatro órdenes de detención administrativa contra el Sr. Hassanat. Como se ha señalado anteriormente, el Grupo de Trabajo no considera que los tribunales militares israelíes cumplan las normas de un tribunal independiente e imparcial a los efectos del examen de los casos relacionados con civiles. Además, el Grupo de Trabajo ha sostenido sistemáticamente la opinión de que los civiles nunca deben ser llevados ante tribunales militares, y que hacerlo así viola el Pacto y el derecho internacional consuetudinario<sup>16</sup>. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Hassanat se vio privado del derecho a que su caso fuera dirimido en un juicio justo por un tribunal competente, independiente e imparcial, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. Además, el Grupo de Trabajo está convencido, sobre la base de la información presentada por la fuente, que no fue abordada por el Gobierno, de que las actuaciones contra el Sr. Hassanat se han celebrado a puerta cerrada, en contra de su derecho a ser oído públicamente en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. No hay ninguna indicación de que alguna de las excepciones al derecho de audiencia pública se aplique en el presente caso.

36. Además, el Sr. Hassanat sigue privado de libertad casi dos años después de su arresto, sin cargos ni juicio, y parece estar detenido indefinidamente en virtud de sucesivas órdenes de detención. Al detener al Sr. Hassanat durante un período tan prolongado sin ninguna posibilidad real de puesta en libertad, el tribunal militar y la fiscalía le han denegado efectivamente el derecho a la presunción de inocencia que le asiste en virtud del artículo 14, párrafo 2, del Pacto. También se han violado sus derechos a ser informado sin demora de los cargos que se le imputan y a ser juzgado sin dilaciones indebidas con arreglo al artículo 14, párrafos 3 a) y 3 c), del Pacto.

37. Además, como se ha señalado anteriormente, la fuente alega que el tribunal militar ha denegado al Sr. Hassanat el acceso a la información de un expediente secreto en el que se basó para dictar cuatro órdenes de detención administrativa contra él, en violación del principio de igualdad de medios procesales. El Grupo de Trabajo recuerda que toda persona privada de libertad tiene derecho a acceder al material relacionado con esa privación de libertad, en particular a la información que pueda ayudar a esa persona a defender que la privación de libertad es ilegal o que los motivos de esta ya no existen<sup>17</sup>. Sin embargo, ese derecho no es absoluto, y la divulgación de información puede ser restringida si tal restricción es necesaria y proporcionada para alcanzar un objetivo legítimo, como la protección de la seguridad nacional, y si el Estado ha demostrado que con medidas menos restrictivas no se podría lograr el mismo resultado, por ejemplo, con la presentación de informes sumarios en los que se señale claramente el fundamento de hecho de la detención<sup>18</sup>. En el presente caso, el Gobierno no proporcionó ninguna justificación de por qué el Sr. Hassanat no podía acceder a toda la información en su caso. Esto violó su derecho, en virtud del artículo 14, párrafos 1 y 3 b), del Pacto, a un juicio imparcial y a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa “en condiciones de plena igualdad”<sup>19</sup>.

38. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que esas violaciones del derecho a un juicio justo fueron de tal gravedad que hacen que la privación de libertad del Sr. Hassanat sea arbitraria y se inscriba en la categoría III.

39. Además, en su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha observado una pauta de las autoridades israelíes consistente en utilizar la detención administrativa para privar de libertad a palestinos por tiempo indefinido sin cargos ni juicio<sup>20</sup>. A falta de una explicación del Gobierno, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que el Sr. Hassanat, que es

<sup>16</sup> A/HRC/27/48, párrs. 66 a 71.

<sup>17</sup> Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 12 y directrices 11 y 13.

<sup>18</sup> *Ibid.*, directriz 13, párrs. 80 y 81.

<sup>19</sup> Opiniones núms. 78/2018, párrs. 78 y 79; 18/2018, párr. 53; 89/2017, párr. 56; 50/2014, párr. 77; y 19/2005, párr. 28 b). Véase también la opinión núm. 70/2019.

<sup>20</sup> Opiniones núms. 73/2018, 34/2018, 86/2017, 44/2017, 31/2017 y 24/2016. Véase también A/HRC/38/15, párrs. 118.159, 118.162, 118.164 y 119.4.

palestino, fue detenido con arreglo a un criterio discriminatorio, a saber, su origen nacional, étnico y social. El Grupo de Trabajo considera que también fue detenido por su género, ya que hay una clara tendencia a seleccionar a los varones jóvenes cuando se efectúan detenciones. En estas circunstancias, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno ha violado los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, y que la privación de libertad del Sr. Hassanat fue arbitraria y se inscribe en la categoría V.

40. El Grupo de Trabajo desea expresar su grave preocupación por el presunto trato que recibió el Sr. Hassanat durante su arresto y privación de libertad. Según la fuente, el Sr. Hassanat fue arrestado de noche por las Fuerzas de Defensa de Israel y posteriormente registrado, esposado, zarandeado y golpeado por los soldados con sus manos y sus armas, tras haberle vendado los ojos. Posteriormente fue objeto de múltiples traslados entre prisiones, así como sometido a un régimen de aislamiento cuando inició una huelga de hambre<sup>21</sup>. La huelga de hambre, según se informa, duró más de un mes. La detención del Sr. Hassanat ha interrumpido claramente su educación, y está tratando de obtener su libertad para preparar las pruebas de admisión a la universidad. Además, la prolongada detención administrativa del Sr. Hassanat en ausencia de cargos, pruebas conocidas o juicio puede en sí misma constituir un maltrato<sup>22</sup>. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

41. El presente caso es uno de los diversos casos que se han presentado al Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la privación arbitraria de libertad en Israel. El Grupo de Trabajo observa que muchos de los casos de detención administrativa en Israel y el Territorio Palestino Ocupado siguen una pauta ya conocida de reclusión indefinida mediante órdenes de detención administrativa consecutivas sin cargos ni juicio (a menudo basadas en pruebas secretas y con frecuencia bajo jurisdicción militar), y con recursos judiciales limitados o nulos para revisar la legalidad de la detención<sup>23</sup>. El Grupo de Trabajo recuerda que en determinadas circunstancias el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras situaciones graves de privación de libertad en violación de las normas fundamentales del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad<sup>24</sup>.

42. Habida cuenta de las graves acusaciones formuladas en el presente caso, así como del patrón de detención administrativa arbitraria constatado en otros casos presentados al Grupo de Trabajo, este ha decidido remitir la cuestión al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967.

43. Por último, el Grupo de Trabajo celebraría tener la oportunidad de cooperar de manera constructiva con el Gobierno para abordar la cuestión de la privación arbitraria de la libertad. El 7 de agosto de 2017, el Grupo de Trabajo envió una solicitud al Gobierno para que realizara una visita al país, incluido el Territorio Palestino Ocupado, y espera una respuesta positiva. En este contexto, el Grupo de Trabajo recuerda la invitación que el 12 de septiembre de 2014 le cursó la Misión Permanente de Observación del Estado de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra para realizar una visita oficial al Territorio Palestino Ocupado.

<sup>21</sup> Véase CAT/C/ISR/CO/5, párr. 27 (en el que se señala que las personas privadas de libertad que realizan huelgas de hambre nunca deben ser sometidas a malos tratos ni castigadas por la huelga de hambre y deben recibir la atención médica necesaria de acuerdo con sus deseos).

<sup>22</sup> A/HRC/37/42, párr. 17.

<sup>23</sup> Opiniones núms. 73/2018, 34/2018, 86/2017, 44/2017, 31/2017, 24/2016, 43/2014, 58/2012, 20/2012, 3/2012, 9/2010, 5/2010, 26/2007, 3/2004, 23/2001, 17/2000, 16/2000, 11/1998, 10/1998, 9/1998, 8/1998, 24/1996, 18/1996, 17/1996, 16/1996, 16/1994, 18/1993, 17/1993 y 36/1992.

<sup>24</sup> Opinión núm. 47/2012, párr. 22.



## Disposición

44. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Mustafa Hassanat es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, III y V.

45. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Israel que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Hassanat sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

46. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, en particular el riesgo de que se produzca un daño a la salud del Sr. Hassanat, el remedio adecuado sería poner al Sr. Hassanat inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que plantea en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte medidas urgentes para garantizar la liberación inmediata del Sr. Hassanat.

47. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Hassanat y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

48. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que ajuste sus leyes, en particular la Orden Militar núm. 1651, a las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a los compromisos contraídos por Israel en virtud de las normas internacionales de derechos humanos.

49. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso: a) al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y b) al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, para que adopte las medidas oportunas.

50. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

## Procedimiento de seguimiento

51. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si el Sr. Hassanat ha sido liberado y, en caso afirmativo, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Hassanat;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Hassanat y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Israel con sus obligaciones internacionales, de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

52. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

53. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

54. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>25</sup>.

*[Aprobada el 1 de mayo de 2020]*

---

<sup>25</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.